

COLOMBIA Y ECUADOR

Crisis a tener en cuenta en la frontera

ACERCA DE ESTE INFORME

Objetivo

En este informe se presenta un panorama general de dos crisis humanitarias importantes en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador que se cree que pueden continuar en los próximos 6 a 12 meses. Su objetivo es servir de base para la toma de decisiones y la programación humanitaria al anticipar las necesidades y limitaciones en las operaciones humanitarias. Específicamente, el informe presenta un panorama general y una perspectiva del impacto humanitario de la violencia armada y los flujos migratorios en la población civil de la región.

Limitaciones y vacíos de información

El futuro es intrínsecamente complejo e incierto. En las secciones de perspectivas se presenta la posible evolución de las crisis, considerando su alcance específico y la información disponible a noviembre de 2023. La aparición de nueva información y la influencia de factores no tenidos en cuenta pueden invalidar estas perspectivas. También existen vacíos de información relacionados con los incidentes de protección en Ecuador, en especial en torno a la violencia basada en género (VBG).

Metodología

El informe se basa en la revisión de datos secundarios de fuentes públicas y cuatro entrevistas a informantes clave recopiladas entre octubre y noviembre de 2023. Tres de las entrevistas se realizaron con organizaciones humanitarias y una con una organización de la sociedad civil.

Las crisis se seleccionaron con base en el reciente aumento de los impactos humanitarios que ha ocasionado la violencia armada y los importantes flujos migratorios en la frontera entre Colombia y Ecuador. Para cada crisis, el equipo de ACAPS recopiló la información existente, trazó un mapa de las causas relevantes detrás de las crisis, destacó los desarrollos recientes y los impactos humanitarios, y anticipó su probable evolución en los próximos meses.

Mapa 1. La región fronteriza entre Colombia y Ecuador



Fuente: ACAPS (19/12/2023)

MAPA 1

The Map 1. Colombia and Ecuador border zone	Mapa 1. Zona fronteriza entre Colombia y Ecuador
Legend	Convenciones
International borders	Fronteras internacionales
Department borders	Fronteras departamentales
Colombia-Ecuador border zone	Zona fronteriza colombo-ecuatoriana



TABLA DE CONTENIDOS

Crisis a tener en cuenta 1. Violencia armada en la frontera colombo-ecuatoriana.....	3
Descripción general del contexto.....	3
Principales causas de la crisis.....	5
Perspectivas.....	7
Crisis a tener en cuenta 2. Migración en la frontera colombo-ecuatoriana.....	8
Principales causas de la crisis y perspectivas.....	9
Perspectiva regional.....	11
Perspectiva del impacto humanitario.....	11
Anexo I. Estadísticas comparadas de la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador.....	12

CONTEXTO GENERAL Y PANORAMA DE LA SITUACIÓN HUMANITARIA

La frontera colombo-ecuatoriana enfrenta una compleja situación humanitaria. La región comprende los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo y las provincias ecuatorianas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, como se presenta en el Mapa 1. La región fronteriza entre Colombia y Ecuador.

El conflicto armado en Colombia y la violencia de las pandillas en Ecuador, alimentados por las luchas por el control de las economías ilegales (como el narcotráfico y la minería ilegal), exponen a la población civil a graves incidentes de protección. Estos incluyen desplazamientos, confinamientos, desapariciones forzadas, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, homicidios selectivos contra líderes sociales, artefactos explosivos y VBG (GIFMM/Clúster de Protección 08/07/2022; ACAPS 07/12/2023, 26/07/2023, 11/04/2023, y 13/01/2023).

En 2016, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) firmaron un acuerdo de paz. Este acuerdo redujo temporalmente los niveles de violencia antes de que se reconfigurara y aumentara en los últimos años (HRW consultado el 19/12/2023 a). Desde entonces, los desplazamientos, los confinamientos, la contaminación generalizada por minas antipersonal (MAP), las masacres (definidas en Colombia como el asesinato de tres o más civiles en el mismo incidente) y los asesinatos y amenazas contra candidatos políticos han seguido afectando a Colombia (HRW consultado el 19/12/2023 b; Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 26/09/2023).

Nuevos grupos armados, sobre todo los grupos disidentes de las FARC-EP, han estado ocupando las zonas que las FARC-EP abandonaron tras el acuerdo de paz y luchando por controlarlas. Las FARC-EP estaban presentes en 242 de los 1100 municipios, la mayoría del suroccidente colombiano (Pares, 25/06/2018). Más recientemente, los enfrentamientos entre grupos armados nuevos y antiguos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las fuerzas armadas colombianas, han impulsado la violencia contra la población civil y han aumentado el impacto humanitario del conflicto. Los enfrentamientos entre estos grupos armados son las principales causas del desplazamiento y el confinamiento (OCHA 01/11/2023).

En Nariño y Putumayo, los impactos sobre la población civil han sido particularmente severos. De enero a septiembre de 2023, el desplazamiento masivo (definido en Colombia como sucesos de desplazamiento que involucran a más de 50 personas a la vez) afectó principalmente a Nariño, en donde ocurrieron el 53% de todos los sucesos de desplazamiento en el país, afectando a 24500 personas. En Putumayo, las emergencias humanitarias relacionadas con el conflicto armado aumentaron en 2023 en comparación con años anteriores (OCHA 01/11/2023). Por ejemplo, el número de personas desplazadas por la fuerza



se multiplicó por siete, pasando de poco más de 430 entre enero y octubre de 2022 a 3200 entre enero y noviembre de 2023 (OCHA 21/11/2022; OCHA consultado el 12/12/2023 a).

La zona fronteriza tiene una importante presencia de comunidades indígenas, que están entre las más afectadas por los hechos violentos. También existe una importante población étnica afrocolombiana, principalmente en los departamentos de Nariño y Putumayo. El 15,5% de la población de Nariño y el 17,9% de Putumayo se identifica como indígena, mientras que el 17,5% de la población de Nariño y el 3,6% de Putumayo se identifica a como afrocolombiana (DANE 16/09/2019 y 28/02/2021).

La comunidad indígena Awá se encuentra entre las poblaciones con mayor riesgo ante la violencia armada, ya que vive en algunos de los municipios más afectados por el conflicto en Nariño y Putumayo y en el norte de Ecuador (ONIC consultado el 05/12/2023; DP 07/03/2023; CNTI 16/07/2022).

Además del conflicto armado, Colombia ha experimentado un aumento significativo de movimientos migratorios mixtos, con personas provenientes principalmente de la vecina Venezuela, pero también de otros países, como China, Ecuador y Haití, usando el departamento de Nariño como corredor principal. La mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo en tránsito por Colombia se desplazan hacia América del Norte. A octubre de 2023, 238000 personas habían ingresado a Colombia, 88000 de manera regular y 150000 de manera irregular (PGN 22/10/2023).

La inestabilidad política y los desafíos de seguridad en el norte de Ecuador también tienen un efecto importante en la manera como se desarrolla la crisis humanitaria. Ecuador vive desde 2020 una crisis de inseguridad provocada por la lucha entre bandas criminales por el control de las economías ilegales, con graves afectaciones en los indicadores de seguridad del país. La tasa de homicidios alcanzó 25,9 por cada 100000 habitantes en 2022, una de las más altas de América del Sur y solo superada por Venezuela (40,4) y Colombia (26,1) (InSight Crime 08/02/2023). La crisis de inseguridad en Ecuador afecta a l flujo regular de migrantes y solicitantes de asilo que cruzan desde Ecuador hacia Colombia e incentiva la migración adicional de nacionales ecuatorianos, ya sea dentro de Ecuador o hacia otros países, entre ellos Colombia (KII 25/10/2023).

El aumento de la inseguridad y la migración en ambos países crea un entorno humanitario desafiante en la región fronteriza, para la cual se presentan estadísticas comparativas para los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo y las provincias ecuatorianas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos en el Anexo I. Estadísticas comparadas de la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador.

Crisis a tener en cuenta 1. Violencia armada en la frontera colombo-ecuatoriana

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTEXTO

Colombia

La intensificación del conflicto armado colombiano ha tenido importantes impactos humanitarios en los departamentos del sur del país. El impacto más visible es el aumento de los desplazamientos y los confinamientos.

Desplazamientos

El desplazamiento a nivel nacional en 2023 aumentó de 28700 en el primer semestre (enero–junio) a 36200 en el segundo semestre (julio–noviembre). El desplazamiento afectó principalmente a Nariño, que concentró el 46% de las personas desplazadas a nivel nacional a noviembre (OCHA 01/11/2023). De enero a noviembre, 29 000 personas fueron desplazadas en Nariño y 3200 en Putumayo (OCHA consultado el 12/12/2023 a).

Casi 700 de las personas desplazadas en Nariño hicieron parte de desplazamientos masivos que cruzaban hacia Ecuador (OCHA, consultado el 12/12/2023 a). Es probable que exista subregistro en las cifras de desplazamiento, lo que significa que los impactos podrían ser más intensos. El conflicto armado en el sur de Colombia suele llevar a personas a huir de la violencia hacia Ecuador. Algunas familias colombianas tienden a trasladarse al sur de la frontera en el punto álgido de los enfrentamientos entre grupos armados y regresan cuando la intensidad disminuye. Otras familias colombianas se desplazan con la intención de salir de manera definitiva de Colombia, principalmente por las amenazas de los grupos armados, en particular a líderes sociales y activistas, y para evitar el reclutamiento de sus miembros más jóvenes (niños, niñas y adolescentes) (KII 25/10/2023). A septiembre de 2023, más de 75800 refugiados y 9500 solicitantes de asilo estaban registrados en Ecuador, el 95% de los cuales provenían de Colombia (ACNUR 26/10/2023).

Confinamientos

Los eventos de confinamiento a nivel nacional en 2023 aumentaron de 25700 en el primer semestre (enero–junio) a 55400 en el segundo semestre (julio–noviembre). A noviembre, el confinamiento había afectado a 8300 personas en Nariño y 3000 en Putumayo. Durante el confinamiento, los grupos armados imponen restricciones al acceso humanitario y a la libre



circulación. Las organizaciones humanitarias se enfrentan a amenazas contra su personal o sus instalaciones si viajan a zonas controladas por grupos armados, y a la población se le impide acceder a la ayuda humanitaria (OCHA, consultado el 12/12/2023 b).

Zonas más afectadas

Triángulo de Telembí. Una de las zonas más afectadas en Nariño es el Triángulo de Telembí, que comprende los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, y limita con Ecuador. Entre enero y septiembre de 2023, los desplazamientos masivos afectaron a más de 5900 personas, mientras que los confinamientos afectaron a 3400. Entre enero de 2022 y septiembre de 2023, hubo más de 11 accidentes que involucraron minas antipersonales y 24 incidentes reportados de violencia sexual. Los derrames de petróleo generados por la perforación ilícita de oleoductos por parte de grupos armados también afectaron a más de 12600 personas. El derrame mostró cómo las comunidades locales se vieron doblemente afectadas tanto por el conflicto armado como por los desastres. El Triángulo del Telembí también recibe comunidades desplazadas de otros municipios nariñenses. En junio, agosto y septiembre de 2023, más de 3900 personas afrocolombianas e indígenas desplazadas de los municipios de Tumaco y Ricaurte llegaron a Barbacoas (OCHA 22/11/2023).

Ricaurte, que también limita con Ecuador, es el municipio del departamento de Nariño más afectado en términos de desplazamientos, con 5300 personas desplazadas a septiembre de 2023 (OCHA 01/11/2023). El conflicto armado afectó las elecciones municipales de octubre de 2023 en este municipio. Entre abril y junio de 2023, grupos armados atacaron a tres candidatos a la alcaldía de Ricaurte, y dos de ellos fueron presionados para unificar sus campañas. Las amenazas de grupos armados a un candidato provocaron manifestaciones de simpatizantes, lo que, junto con la presencia del ELN y La Segunda Marquetalia, llevó a las autoridades a suspender las elecciones municipales en Ricaurte (DP 23/08/2023; EE 29/10/2023). Otros centros de votación en Nariño tuvieron que ser reubicados debido a desplazamientos masivos y otras acciones violentas (EE 29/10/2023; Infobae 29/10/2023).

En el departamento del Putumayo, la zona fronteriza es la más afectada por la violencia armada. Esta zona concentra la mayor parte de las familias cultivadoras de coca, lo que ha llevado a los grupos armados a luchar por su control (Pares, 14/10/2022). Puerto Asís es, por mucho, el municipio de Putumayo más afectado en 2023, con más del 90% de las personas afectadas por desplazamiento y confinamiento en el departamento a septiembre de 2023 (OCHA 01/11/2023). Los grupos armados en el Putumayo han implementado actividades de control social, como el establecimiento de normas de vestimenta y amenazas a líderes sociales (KII 01/11/2023). Los grupos más afectados son las comunidades indígenas y afrodescendientes, que enfrentan las amenazas por parte de grupos armados de utilizar sus tierras para cultivos ilícitos (hoja de coca), lo que afecta la autonomía y el autogobierno de las comunidades (DP 29/08/2022).

Impactos humanitarios y ambientales

Además del desplazamiento y el confinamiento, los impactos humanitarios de la violencia se relacionan principalmente con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; la deserción escolar; las necesidades humanitarias relacionadas con la alimentación y la nutrición, el acceso a la salud mental y física, la provisión de alojamiento para las personas desplazadas y los sistemas locales de abastecimiento de agua; y el suministro de información relacionada con emergencias, gestión de riesgos y prácticas de higiene (OCHA 22/11/2023). El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados es una de las principales amenazas de protección a ambos lados de la frontera y afecta particularmente a la comunidad indígena Awa. Los grupos armados están presentes en el lugar donde vive esta comunidad, exponiendo a los niños, niñas y adolescentes al reclutamiento, en especial a aquellos cuyas familias no pueden acompañarlos todo el tiempo. Los grupos armados extienden su control sobre la población local a través del reclutamiento, las amenazas y los homicidios contra líderes sociales y étnicos tradicionales, y la contaminación de la tierra con minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y restos explosivos de guerra (DP 07/03/2023).

Las acciones violentas de los grupos armados también tienen consecuencias ambientales. El 10 de octubre, una explosión provocó un derrame de petróleo que contaminó los ríos Mocoa y Caquetá, amenazando las fuentes de agua y los medios de vida de las comunidades locales (RNC 13/10/2023; AAS 10/10/2023).

En Putumayo, las mujeres y niñas venezolanas corren el riesgo de ser explotadas laboral y sexualmente, y enfrentan importantes barreras para acceder a los servicios de salud y educación debido a su situación migratoria irregular. Muchas mujeres son parejas de combatientes de grupos armados, por lo que temen denunciar los incidentes de violencia doméstica ante las autoridades debido a posibles represalias (KII 05/12/2023). Tanto el Estado Mayor Central (EMC) como La Segunda Marquetalia han impuesto medidas de control social sobre la población civil, como la exigencia de documentos de identidad no oficiales emitidos por estos grupos (Parés 14/10/2022; KII 08/11/2023).



Ecuador

Al otro lado de la frontera, la situación de seguridad en Ecuador también afecta gravemente a la población civil. Los enfrentamientos entre bandas criminales por el control del narcotráfico y otras economías ilegales han resultado en aumentos sostenidos de la tasa de homicidios del país. De enero a julio de cada año, en comparación con el año anterior, Esmeraldas tuvo la cuarta tasa de homicidios más alta de Ecuador en 2022 y la segunda más alta después de la de Guayaquil en 2023. Más del 90% de las víctimas fueron hombres menores de 30 años (Primicias 11/07/2023). Esmeraldas se ha convertido en un centro de tránsito de drogas provenientes de Colombia (InSight Crime 08/02/2023). Los grupos armados utilizan la zona fronteriza como lugar de refugio y almacenamiento de armas, drogas y materias primas para la producción de drogas (DP 07/03/2023).

La población también enfrenta amenazas, extorsiones y un ambiente general de miedo producto de las tácticas de las bandas criminales, como la exhibición pública de cadáveres ahorcados y otros actos similares de intimidación (InSight Crime 17/02/2023). Estos actos violentos han contribuido a aumentar la propensión de la población local a migrar fuera de Ecuador (KII 25/10/2023).

PRINCIPALES CAUSAS DE LA CRISIS

Grupos armados mencionados en el informe

FARC-EP fue el grupo armado más grande de Colombia hasta que firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano en 2016. Algunos de sus miembros de rango medio no se acogieron al acuerdo y formaron otros grupos armados (InSight Crime 23/11/2023).

El EMC es una alianza de varios grupos que pertenecieron a las desmovilizadas FARC-EP (El País 16/04/2023). Aunque estos grupos dicen formar parte de una organización unificada, su nivel de cohesión y estructura de mando son cuestionables (CORE 26/07/2021; EE 05/06/2023; Razón Pública 26/03/2023). Junto con el actual líder, alias 'Iván Mordisco', alias 'Gentil Duarte' lideró este grupo hasta su muerte (InSight Crime 16/02/2023). Este informe se refiere a los grupos disidentes de las FARC-EP que al 13 de julio de 2023 habían admitido públicamente su adhesión al EMC como el EMC. Los grupos que pertenecen o no a la EMC pueden cambiar con el tiempo.

La Segunda Marquetalia, junto con el EMC, es la segunda de las dos alianzas de grupos armados que pertenecían a las FARC-EP (CORE 26/07/2021). Este grupo armado nació en 2019, cuando algunos excomandantes de las FARC-EP, como alias 'Iván

Márquez', 'Jesús Santrich', 'Romaña' y 'El Paisa' anunciaron que se estaban rearmando (El País 21/04/2023; EE 07/07/2023). Este informe se refiere a los grupos disidentes de las FARC-EP que al 13 de julio de 2023 habían admitido públicamente pertenecer a La Segunda Marquetalia como La Segunda Marquetalia. Los grupos que pertenecen o no a La Segunda Marquetalia pueden cambiar con el tiempo.

Las AGC nacieron tras la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. El Gobierno colombiano los denomina Clan del Golfo por su origen y fuerte presencia en el Golfo de Urabá. Anteriormente, el Gobierno colombiano los llamaba Los Urabeños y Clan Úsuga (Badillo y Mijares 16/01/2022).

El ELN nació en la década de 1960 y tiene presencia en más de 200 municipios de Colombia (DP 09/12/2022).

Los Choneros se encuentran entre las bandas criminales más prominentes de Ecuador, los cuales se originaron en la ciudad de Chone, en el oeste de este país, en la década de 1990. Están presentes en seis provincias ecuatorianas, entre ellas Esmeraldas (InSight Crime 04/10/2021).

Los Lobos son una banda criminal que se hizo parte de Los Choneros y lucha constantemente con ellos. Sus actividades incluyen el transporte de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa, la distribución de drogas y la minería ilegal (InSight Crime 08/11/2022).

Disputas por el control de las economías ilegales

El control de las economías ilegales impulsa los enfrentamientos entre diferentes grupos armados. La principal fuente de ingresos de estos grupos es el tráfico de cocaína, cuya producción se basa en el cultivo de hoja de coca, que realizan comunidades rurales en Colombia y otros países. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína a nivel mundial, con un aumento del 13% en el área dedicada a cultivos de coca y del 24% en la producción de cocaína entre 2021 y 2022. El 77% del aumento de las áreas dedicadas a cultivos de coca se concentró en el departamento de Putumayo. Tumaco, en Nariño, y Puerto Asís, en Putumayo, en la región fronteriza, son dos de los municipios con más superficie dedicada a cultivos de coca (UNODC/Govt. Colombia 12/09/2023).

La minería ilegal también forma parte de las fuentes de ingresos de los grupos armados. Colombia y Brasil son algunos de los mayores productores de oro extraído ilegalmente. Las autoridades colombianas estiman que los grupos armados ganan entre dos y tres mil millones



de dólares anuales con la minería ilegal de oro en el país (*The Economist* 09/11/2023). La mayor parte de la explotación de oro aluvial (es decir, oro extraído de los sedimentos del suelo dejados por los flujos de agua) en Nariño (más del 70%) y Putumayo (más del 90%) es ilegal. Las zonas donde se realiza la explotación ilegal de oro aluvial coinciden en gran medida con tierras de cultivo de coca, 95% para Putumayo y 66% para Nariño (UNODC 09/06/2022). Dado que los grupos armados controlan las zonas con cultivos de coca, esta coincidencia sugiere un control de estos grupos similar al que tienen sobre la minería ilegal. La tala ilegal también se suma a las fuentes de ingresos de los grupos armados (KII 01/11/2023).

Rivalidades entre grupos armados en Colombia

Los grupos armados se disputan el control de las economías ilegales, principalmente vinculadas al narcotráfico, la minería, la explotación forestal y la trata de personas. El Gobierno colombiano mantiene conversaciones de paz con el ELN y el EMC. Como parte de este proceso, hay ceses al fuego vigentes entre las fuerzas armadas colombianas y cada uno de estos grupos (*Gobierno Colombia* 16/10/2023 y 06/07/2023 AP 03/08/2023; RNC 16/10/2023). Sin embargo, los ceses al fuego no impiden que los grupos armados se enfrenten entre sí, lo que resulta en continuos impactos humanitarios. Por ejemplo, el cese al fuego entre el Gobierno colombiano y el ELN no ha detenido el reclutamiento de niños mayores de 15 años (STC 02/08/2023). Actualmente no existe un cese al fuego entre el Gobierno colombiano y La Segunda Marquetalia. Actualmente no existe un cese al fuego entre el Gobierno colombiano y La Segunda Marquetalia.

En Nariño, el EMC y La Segunda Marquetalia se disputan el control de la costa pacífica del departamento, un corredor clave para el transporte de drogas ilegales hacia Ecuador. Se estima que un tercio de la producción de cocaína de Colombia sale del país hacia Ecuador (*InSight Crime* 28/08/2023). Los enfrentamientos entre estos grupos armados ocurren en el Triángulo de Telembí y en la carretera que va desde el municipio de Tumaco, en el occidente, hasta Pasto, capital de Nariño, ubicada en el oriente (*Pares*, 31/08/2023).

El EMC y el ELN también se disputan el control territorial y social de los municipios de Los Andes, La Llanada, Linares, Samaniego y Santacruz, que se encuentran en el centro oriente de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador. Los municipios de Los Andes y La Llanada se encuentran en una posición estratégica dado su acceso a varias vías, lo que los hace importantes para los grupos armados (DP 06/07/2023). La confrontación entre ambos grupos puede llevar al ELN a utilizar minas antipersonales como medida de protección ante los avances del EMC (DP 06/09/2023). El ELN impone fuertes medidas de control social a las poblaciones para evitar que interactúen con los miembros del EMC. Se han reportado amenazas, restricciones de movilidad y estigmatización. Esto limita el acceso a la educación, ya que los docentes y los estudiantes tienen miedo de asistir a las escuelas (DP 06/07/2023).

En Putumayo se han reportado enfrentamientos entre el EMC y La Segunda Marquetalia por el control de las zonas productoras de coca. Entre ellos se cuentan homicidios y amenazas a líderes sociales y étnicos, principalmente en la zona fronteriza donde se concentran los cultivos de coca (*Pares*, 14/10/2022).

Rivalidades entre pandillas e inestabilidad política en Ecuador

Otro factor clave detrás de la violencia en ambos lados de la frontera tiene que ver con las luchas entre bandas criminales en Ecuador por el control del tráfico de drogas proveniente de Colombia. La desmovilización de las FARC-EP, que tenían el monopolio del narcotráfico en la zona fronteriza, abrió un vacío para otros grupos que comenzaron a disputarse su control. Entre estos grupos se encuentran las bandas locales ecuatorianas y las mafias mexicanas (como los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación) y albanesas, que han reclutado bandas locales para enviar cocaína a Europa (CFR 14/06/2023).

Los factores clave detrás de la crisis de seguridad de Ecuador son el aumento de la producción de cocaína proveniente de Colombia, la fragmentación de las bandas criminales ecuatorianas, la participación de organizaciones criminales extranjeras (principalmente de Colombia y México) y la debilidad institucional del Estado ecuatoriano en términos de seguridad (*InSight Crime* 10/08/2023).

Las pandillas más importantes son Los Choneros y Los Lobos, dos federaciones rivales que se enfrentan entre sí en todo el país (*InSight Crime* 08/02/2023). El creciente protagonismo de estas pandillas derivó en una crisis de seguridad que se hizo visible con el asesinato de un candidato presidencial que expresó su oposición a las pandillas en agosto de 2023 (*HRW* 10/08/2023; *BBC* 10/08/2023). La violencia armada de estas pandillas afecta a la población local, así como a los migrantes y solicitantes de asilo que se desplazan por el país, exponiéndolos a amenazas y extorsiones. Algunas familias que habían migrado de Colombia a Ecuador para huir del conflicto armado en su país en años anteriores están considerando regresar dados los actuales niveles de violencia en Ecuador (KII 25/10/2023). La crisis de seguridad también ha aumentado el interés de los ecuatorianos por emigrar fuera del país (ver Crisis a tener en cuenta 2. Migración en la frontera colombo-ecuatoriana).

El Gobierno ecuatoriano ha declarado estados de emergencia y ha aumentado la capacidad de las cárceles del país. El 3 de agosto de 2023 declaró el estado de emergencia por 60 días en todo el país (*Presidente de Ecuador* 10/08/2023; *Francia* 24 08/10/2023). El 8 de octubre prorrogó el estado de emergencia por 30 días más (*Primicias* 09/10/2023). Esto no ha sido suficiente para disminuir el poder de las pandillas ni el nivel de violencia en el país. Las amenazas a fiscales, jueces y funcionarios judiciales son comunes (*InSight Crime* 10/08/2023).



La situación económica también ha contribuido a la crisis de inseguridad. Los bajos precios del petróleo (principal producto de exportación de Ecuador) y la pandemia han afectado los ingresos y el empleo de la población, poniendo a los jóvenes en riesgo de ser reclutados por las pandillas (CFR 14/06/2023). En diciembre de 2018, el precio promedio del petróleo ecuatoriano se desplomó a 48,7 USD/barril, muy por debajo de los 70,3 USD/barril de octubre de 2018. En octubre de 2023, el precio fue de USD 81,2/barril (CEIC consultado el 19/12/2023; Statista consultado el 19/12/2023). La inestabilidad política ha empeorado la situación. En mayo de 2023, el presidente de Ecuador disolvió la Asamblea Nacional para convocar elecciones presidenciales y legislativas anticipadas y evitar ser destituido de su cargo mediante un juicio político. Es la primera vez en la historia del país que se utiliza este mecanismo (BBC 17/05/2023). En octubre de 2023 se eligió un nuevo presidente que ocupará el cargo hasta mayo de 2025, la mitad del mandato presidencial habitual (DW 17/10/2023; NYT 15/10/2023).

PERSPECTIVAS

Es probable que continúen los enfrentamientos violentos entre grupos armados en Colombia y pandillas criminales en Ecuador. El aumento de los cultivos de coca y la producción de cocaína proporcionaría más incentivos para que estos grupos se disputen el control del tráfico de drogas. Al mismo tiempo, la demanda internacional de oro seguiría estimulando la minería ilegal.

Si los ceses al fuego se interrumpen o no se renuevan debido a complicaciones en las negociaciones de paz entre el Gobierno y los grupos armados, existe la posibilidad de que se intensifiquen las acciones armadas de las fuerzas armadas colombianas, lo que amplificaría aún más el impacto humanitario del conflicto. Por ejemplo, en los municipios de Los Andes y La Llanada en Nariño, la población civil puede experimentar un recrudecimiento de las medidas de control social por parte de los grupos armados, como la estigmatización y las normas de comportamiento (DP 06/07/2023).

La persistencia de las economías ilegales y la posible ruptura de los ceses al fuego indican que la intensidad del conflicto armado colombiano podría no disminuir al menos en los próximos 6 a 12 meses. Es probable que el conflicto se intensifique en Putumayo debido a que actualmente los grupos armados se están reforzando, lo que podría desencadenar nuevas crisis humanitarias (KII 08/11/2023).

También se espera que la situación de inseguridad en Ecuador mantenga sus niveles actuales, ya que los factores subyacentes no cambiarían significativamente en el corto plazo. La formulación e implementación de una nueva agenda de seguridad por parte del nuevo Gobierno ecuatoriano llevará tiempo, y su posible eficacia es incierta.

La crítica situación humanitaria en la zona fronteriza puede tener importantes efectos a largo plazo. El reclutamiento de niños en grupos armados los lleva a interrumpir sus estudios, lo que afectará a sus perspectivas económicas futuras. Este problema afectaría de manera desproporcionada a las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, así como al creciente número de migrantes y solicitantes de asilo que cruzan la región.

El conflicto armado seguirá obstaculizando la respuesta humanitaria, ya que la presencia de grupos armados pone en peligro la vida de los trabajadores humanitarios. Las precipitaciones superiores al promedio previstas para enero y febrero en la región, en especial en las zonas costeras del norte de Ecuador, pueden reducir el acceso físico y presentar limitaciones adicionales a las operaciones humanitarias (C3S, consultado el 07/12/2023; ECMWF consultado el 07/12/23; OMM consultado el 07/12/2023).

Durante el primer semestre de 2024, El Niño puede agravar las condiciones humanitarias de las comunidades expuestas a la violencia armada en la región. Las precipitaciones previstas por encima del promedio entre enero y febrero pueden provocar inundaciones y desplazamientos (C3S, consultado el 07/12/2023; ECMWF consultado el 07/12/23; OMM consultado el 07/12/2023; PL 01/12/2023). Las fuertes lluvias, en combinación con temperaturas superiores al promedio, también pueden aumentar la incidencia del dengue (IRI consultado el 08/12/2023; Sippy et al. 06/05/2019).



Crisis a tener en cuenta 2. Migración en la frontera colombo-ecuatoriana

Descripción general del contexto

Mapa 2. Ubicación del Tapón del Darién



Fuente: CFR (22/06/2022)

MAPA 2

Map 2. Location of the Darien Gap	Mapa 2. Ubicación del Tapón del Darién
CARIBBEAN SEA	MAR CARIBE
PANAMA	PANAMÁ
Darien Gap	Tapón del Darién
GULF OF URABA	GOLFO DE URABÁ
Colombia-Panama border	Frontera colombo-panameña
PACIFIC OCEAN	OCÉANO PACÍFICO
Sources: Voice of America; NASA	Fuentes: Voice of America; NASA
COUNCIL on FOREIGN RELATIONS	CONSEJO de RELACIONES EXTERIORES

La región de las Américas está experimentando un aumento sin precedentes de los movimientos migratorios mixtos¹ en varios países de América Central y del Sur, con muchos migrantes y solicitantes de asilo tratando de llegar a los Estados Unidos (PI 16/09/2023). Colombia es un lugar de tránsito clave para las personas migrantes y solicitantes de asilo que viajan a través de América del Sur, ya que el único cruce terrestre entre América Central y del Sur es en la frontera de Colombia con Panamá a través del Tapón del Darién, como se presenta en el Mapa 2. Ubicación del Tapón del Darién.

Existen vacíos de información sobre la cantidad y las nacionalidades de las personas migrantes y solicitantes de asilo que cruzan la frontera entre Colombia y Ecuador. Aunque hay puestos de control migratorios oficiales en la zona, muchos migrantes y solicitantes de asilo cruzan por pasos ilegales, sin dejar rastro oficial en los registros del Gobierno colombiano.

Entre enero y noviembre de 2023, 459000 personas cruzaron el Tapón del Darién. Las principales nacionalidades de estos migrantes y solicitantes de asilo son venezolana (317100), ecuatoriana (54100), haitiana (44100) y colombiana (17600) (SNM consultado el 19/12/2023). Aquellos migrantes que vienen de países al sur de Colombia, como Chile, Ecuador y Perú, son los más propensos a cruzar la frontera colombo-ecuatoriana.

Esta frontera es el principal punto de entrada a Colombia para aproximadamente el 39% de las personas migrantes y solicitantes de asilo en situación irregular. El municipio de Ipiales, en Naríño, es uno de los principales puntos de entrada. Las principales nacionalidades de las personas migrantes y solicitantes de asilo en situación irregular que ingresaron a Colombia (por todas las fronteras) fueron venezolana (204900), haitiana (40580) y ecuatoriana

¹ La migración mixta se refiere al movimiento transfronterizo de personas, generalmente de manera irregular, que implica que individuos y grupos viajan juntos utilizando rutas y medios de transporte similares o facilitadores, pero por diferentes motivos. Las personas que viajan como parte de movimientos mixtos tienen diferentes necesidades y perfiles y pueden ser solicitantes de asilo, refugiados, víctimas de trata, niños no acompañados y separados, apátridas y migrantes (incluidos aquellos en situación irregular o en situación de vulnerabilidad, como los mencionados en este informe) (ACNUR consultado el 19/12/2023).



(42900) a agosto de 2023 (Migración Colombia 12/09/2023). Entre ellos se encuentran migrantes venezolanos que transitan desde el sur del continente hacia Colombia, Venezuela y Estados Unidos; familias de Haití; y la migración extracontinental desde países como China, Vietnam y varios países africanos (PGN 22/10/2023).

Los grupos armados de ambos lados de la frontera se benefician de la situación migratoria ofreciendo servicios de contrabando de migrantes, a menudo a través de cruces irregulares. Las personas en movilidad están expuestas a la inseguridad y a riesgos relacionados con el clima, como homicidios, amenazas, extorsión, VBG y enfermedades como el dengue. Algunas personas migrantes y solicitantes de asilo son víctimas de explotación sexual para obtener alimentos y otros medios de subsistencia básicos (KII 25/10/2023). También están expuestos a las redes de trata de personas de la zona, con riesgos especialmente altos para los niños. Entre 2022 y 2023, el número de niños, niñas y adolescentes que cruzaron por el Tapón del Darién se multiplicó por cuatro, pasando de 21700 a 88600, lo que convierte a este grupo poblacional en uno de los más afectados. Los niños, niñas y adolescentes representan el 25% de las personas migrantes y solicitantes de asilo en América Latina y el Caribe (MMC 02/05/2023).

Las personas migrantes y solicitantes de asilo están expuestas a amenazas de protección, como desapariciones forzadas, masacres y homicidios, desplazamientos forzados, usureros, reclutamiento para actividades de narcotráfico, trata de personas y explotación. Entre 2014 y mayo de 2022, 6400 personas en situación de movilidad fueron reportadas como desaparecidas en América Latina y el Caribe (Protection Cluster/R4V 16/02/2023).

Las organizaciones humanitarias en Colombia han brindado asistencia a migrantes y solicitantes de asilo en la frontera entre Colombia y Ecuador, como asistencia alimentaria, kits de higiene, transporte, refugio, salud, orientación relacionada con los servicios migratorios, apoyo relacionado con la VBG y acceso a alternativas económicas (GTRM 06/12/2023). En el primer semestre de 2023, 111200 personas recibieron asistencia del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos en Nariño, como albergue y alimentación (GIFMM/R4V 26/09/2023). Entre enero y agosto de 2023, las organizaciones humanitarias en Colombia ayudaron a más de 66800 personas en asuntos relacionados con la VBG, incluyendo capacitaciones sobre cómo prevenir y mitigar la VBG, brindar apoyo a las víctimas y prevenir la VBG entre las personas migrantes y solicitantes de asilo. El 71% de las personas que recibieron esta asistencia eran mujeres y el 11% eran niñas (3iSolution et al. 07/11/2023). En Ecuador, hasta septiembre de 2023, las organizaciones humanitarias habían llegado a 155 600 migrantes y refugiados, 21800 de los cuales estaban en tránsito. La asistencia prestada incluyó alojamiento, protección (incluida la protección a la infancia y contra la VBG), seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene, transporte y asistencia en efectivo (GTRM 24/10/2023).

PRINCIPALES CAUSAS DE LA CRISIS Y PERSPECTIVAS

Ecuador y Colombia son países de tránsito de migrantes y solicitantes de asilo, lo que, sumado a la crisis de seguridad en ambos lados de la frontera, expone a este grupo poblacional a riesgos de protección como amenazas, extorsiones y VBG. La violencia en ambos lados de la frontera también contribuye a aumentar los flujos migratorios.

Es crucial comprender cómo se desarrollan las crisis en los principales países de origen para comprender los factores que impulsan la migración y analizar sus posibles impactos humanitarios. Es probable que la actual crisis humanitaria en la frontera entre Colombia y Ecuador continúe si persisten los flujos migratorios. No se espera que la dinámica social y económica que impulsa la migración de América del Sur a América del Norte cambie considerablemente en los próximos 6 a 12 meses.

EE. UU.: cambios legales y requisitos de visado

Los cambios legales en el sistema migratorio de los Estados Unidos han contribuido al aumento de los movimientos migratorios. La expiración del Título 42, que permitía la deportación acelerada de EE. UU., y la creación de nuevas vías legales para la migración podrían haber contribuido al aumento de la migración (NYT 29/10/2023). México y varios países centroamericanos también impusieron requisitos de visa a los ciudadanos venezolanos en 2022, lo que impulsó a muchos migrantes y solicitantes de asilo que no podían ingresar legalmente a ninguno de estos países a cruzar el Tapón del Darién (HRW 10/10/2023).

Colombia: conflictos armados

El conflicto armado colombiano ha provocado que ciudadanos colombianos y migrantes o refugiados acogidos en Colombia se desplacen hacia Ecuador. Entre enero y septiembre de 2023, 509 ciudadanos colombianos fueron desplazados forzosamente a la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, en donde las autoridades ecuatorianas reconocieron a 299 de ellos como refugiados. En el mismo período, 452 ciudadanos venezolanos fueron desplazados forzosamente a la misma provincia, 21 de los cuales fueron reconocidos como refugiados (ACNUR 02/11/2023). Estas cifras corresponden a refugiados registrados y probablemente subestiman el número real de ciudadanos colombianos y migrantes acogidos en Colombia que se han trasladado a Ecuador.

La persistencia de los enfrentamientos entre grupos armados, incluyendo la lucha por el control de las economías ilegales, seguiría estimulando el movimiento de migrantes y solicitantes de asilo de Colombia hacia Ecuador.



Ecuador: inseguridad y crisis económica

Además de la crisis de seguridad en Ecuador, su situación socioeconómica también ha sido un importante factor causante de la migración fuera del país (ACNUR 20/06/2023). La pandemia de COVID-19 afectó fuertemente a la economía de Ecuador, y su PIB se contrajo 7,8% en 2020. Aunque creció un 4,2% en 2021, no fue suficiente para volver a los niveles previos a la pandemia (CEPAL 2022). Se espera que el PIB de Ecuador crezca un 2,3% en 2023, por encima del promedio latinoamericano, pero todavía a un ritmo modesto (CEPAL 09/2023). La tasa de pobreza de Ecuador alcanzó el 27% en el primer semestre de 2023, un 2% más que en 2022. La tasa de pobreza extrema alcanzó el 10,8% (Bloomberg 26/07/2023). El aumento de la violencia y la inestabilidad política también han contribuido al aumento de la migración desde Ecuador. Más de 29000 migrantes y solicitantes de asilo ecuatorianos cruzaron el Tapón del Darién en 2022, y otros 54.100 lo hicieron hasta noviembre de 2023 (ACNUR 20/06/2023; Migración Panamá 2023). La ruta más probable para estos migrantes y solicitantes de asilo es a través de la frontera entre Colombia y Ecuador.

En Ecuador, es probable que la situación económica y de seguridad se mantenga en su estado actual. El nuevo presidente asumió el cargo en noviembre de 2023, y los resultados de su agenda económica y de seguridad probablemente no se materializarían lo suficiente en el corto plazo como para reducir considerablemente la violencia en la zona fronteriza con Colombia o reducir la migración fuera del país. Si la situación actual se mantiene estable, a lo sumo se mantendría el flujo de migrantes y solicitantes de asilo que salen de Ecuador y llegan a Colombia en los niveles actuales, lo que significa que seguirían expuestos a riesgos de protección, salud, VBG y otros.

Venezuela: inestabilidad económica, turbulencias políticas y dificultades humanitarias

La crisis en Venezuela puede caracterizarse como una crisis humanitaria, económica y política multifacética, que ha provocado un número significativo de migrantes y solicitantes de asilo venezolanos en otros países, principalmente en América del Sur, incluidos Colombia, Ecuador y su zona fronteriza (CSIS 27/11/2023). Hasta agosto de 2023, más de siete millones de personas habían abandonado Venezuela debido a la crisis, siendo Colombia la que más migrantes y solicitantes de asilo venezolanos ha recibido (2,9 millones en total) (R4V 07/09/2023). La crisis ha ejercido una presión significativa sobre los países de acogida, lo que ha ocasionado problemas como el acceso limitado a la documentación legal, los servicios básicos y las oportunidades económicas, así como el aumento de la xenofobia. Más de la mitad de la población en Venezuela vive en la pobreza, y las zonas rurales sufren de manera

desproporcionada y carecen de acceso a electricidad (ACAPS 19/04/2023). La crisis también ha expuesto a los venezolanos a mayores riesgos, como la trata de personas, la explotación y las condiciones de vida precarias (ACNUR, consultado el 13/12/2023).

La crisis en Venezuela ha llevado a una situación compleja en la que algunos migrantes y solicitantes de asilo venezolanos salen del país mientras que otros regresan, a menudo momentáneamente. De julio a septiembre de 2023, Colombia, Ecuador y Perú fueron testigos de un número significativamente mayor de salidas de ciudadanos venezolanos en sus fronteras del norte que en las del sur, lo que indica un movimiento de migrantes y solicitantes de asilo venezolanos desde el sur hacia el norte del continente. Es probable que muchos de ellos hayan cruzado la frontera entre Colombia y Ecuador. Muchos venezolanos que salían de Ecuador informaron que tenían la intención de detenerse primero en Venezuela para visitar a familiares y amigos, obtener documentación y, en algunos casos, dejar a los niños con familiares antes de iniciar su tránsito hacia México y EE. UU. (R4V 25/10/2023).

En Venezuela, la crisis multifacética continúa con pocas perspectivas de cambio. En septiembre de 2023, el Gobierno venezolano firmó un acuerdo con la oposición para celebrar elecciones libres y justas en 2024, con un candidato de la oposición para competir contra el actual presidente de Venezuela. Tras este acuerdo, la oposición venezolana organizó elecciones primarias, cuyos resultados no fueron reconocidos por el Gobierno venezolano, lo que puso en duda su posición respecto al acuerdo firmado (NYT 31/10/2023). El Gobierno venezolano también ha intensificado un conflicto con la vecina Guyana por el control de la región en disputa del Esequibo. El Gobierno venezolano incluso ha designado una autoridad en esta región en disputa y ha movilizado tropas en una zona cercana a la frontera con Guyana (El País 06/12/2023). Con el futuro de la transición democrática en duda y una posible escalada de un conflicto internacional, es poco probable que la crisis en Venezuela disminuya en el corto plazo, manteniendo estables los flujos de migrantes y solicitantes de asilo venezolanos. Como resultado, los impactos humanitarios que afectan a los migrantes venezolanos continuarían.

Haití y Chile: la crisis haitiana y la reciente ruta migratoria desde Chile hacia el norte

Haití vive actualmente una compleja crisis política, económica y social. La violencia de las pandillas ha aumentado, lo que ha provocado un aumento de los casos de homicidio, secuestro y violación (ACAPS 02/06/2023). El país también se enfrenta a su tercer año consecutivo de recesión económica, junto con el aumento de la inflación, resultando en inflación de alimentos y reducción de los ingresos (OCHA 17/03/2023). A septiembre de 2023, se estimaba que 4,9 millones de personas experimentaban inseguridad alimentaria (PMA



consultado el 14/12/2023). Desastres provocados por riesgos naturales, como terremotos y sequías, agravan la situación (ACAPS 02/08/2023; PMA 31/03/2023). La inestabilidad política y económica en Haití también ha desencadenado una migración masiva, y muchos haitianos se han trasladado a países sudamericanos como Chile. En octubre de 2021, alrededor de 180000 haitianos vivían en Chile (AP 14/10/2021).

Algunos haitianos se han mudado a países sudamericanos como Chile, pero cambios en las oportunidades económicas y el aumento de la xenofobia en Chile han provocado que estos migrantes y solicitantes de asilo elijan mudarse al norte (HRW consultado el 19/12/2023; NYT 28/09/2021). En los primeros meses de 2023, más de 23000 migrantes haitianos (de aproximadamente 100000 personas) cruzaron el Tapón del Darién, incluidos 2500 hijos de haitianos nacidos en Chile (ONU 14/04/2023). La ruta más probable para estos migrantes y solicitantes de asilo haitianos desde Chile hasta el Tapón del Darién incluye la frontera entre Colombia y Ecuador.

En Haití, la crisis, caracterizada como estructural, se agudizó con el asesinato de su presidente en 2021 (BBC 01/02/2023). Haití sigue siendo el país más pobre de Latinoamérica y el Caribe, y se encuentra entre los más pobres del mundo. Es muy vulnerable a los desastres provocados por riesgos naturales, que aumentarán aún más con el cambio climático. Desde agosto de 2023, Haití está experimentando un nuevo brote de cólera, que se suma a las altas tasas de mortalidad materna e infantil (BM consultado el 19/10/2023). No hay indicios de que esta crisis o la situación de los haitianos que viven en Chile y otros países sudamericanos cambie, lo que mantendría el flujo de migrantes y solicitantes de asilo a través de la región y los impactos humanitarios que los afectan.

PERSPECTIVA REGIONAL

A nivel regional, varios gobiernos latinoamericanos han declarado cambios en sus políticas migratorias y su voluntad de alejarse de las medidas coercitivas para detener la migración. En octubre de 2023, los representantes de 12 países latinoamericanos se reunieron en México para discutir la postura de la región sobre la migración. La declaración que surgió de este encuentro llama a respetar el derecho a migrar, proteger la vida y la dignidad de las personas migrantes y solicitantes de asilo, e incluir la creación de opciones para la regularización permanente (EFE 22/10/2023). Si bien el impacto de esta declaración política sigue siendo incierto, algunos países, como Costa Rica y Panamá, ya han implementado medidas para transportar a migrantes y solicitantes de asilo hacia el norte dentro de sus fronteras, lo que podría mejorar sus condiciones (NYT 08/11/2023).

PERSPECTIVA DEL IMPACTO HUMANITARIO

El mantenimiento de los flujos migratorios actuales seguirá exponiendo a los migrantes y solicitantes de asilo a conflictos armados y violencia de pandillas en la región fronteriza, agravada por la limitada capacidad de las autoridades locales y las organizaciones humanitarias para abordar estas necesidades persistentes. Existe una cantidad creciente de migrantes y solicitantes de asilo con recursos económicos insuficientes, lo que hace que prolonguen sus estancias en determinadas ciudades en lugar de continuar su viaje, lo que plantea retos para la asistencia humanitaria, en especial en sectores como la alimentación, el refugio, el agua y la salud, incluida la salud mental (MMC 02/05/2023).

Las necesidades humanitarias de las personas migrantes y solicitantes de asilo que cruzan la frontera están relacionadas principalmente con la asistencia en procesos legales migratorios, el refugio, la alimentación, la educación, el agua, el saneamiento y la higiene, y la VBG (KII 25/10/2023). Las mayores barreras a las que se han enfrentado las personas migrantes y solicitantes de asilo en Nariño están relacionadas con el acceso a la salud, la inscripción a programas sociales, la educación y el acceso a servicios financieros y de justicia. El 38% de una muestra de migrantes y solicitantes de asilo venezolanos en Nariño, el 60% de los cuales eran mujeres, dijeron que no tenían acceso al sistema de salud, el 63% experimentaba inseguridad alimentaria y el 55% de los niños de 12 a 17 años no asistían a la escuela. El 98% sufrió discriminación por su nacionalidad (GIFMM/R4V 13/12/2023). La presencia de grupos armados y pandillas conlleva riesgos de protección para las personas migrantes y solicitantes de asilo, las cuales están particularmente en riesgo de ser utilizadas para la explotación laboral y sexual, el fraude y el robo (KII 25/10/2023).

Entre los migrantes y solicitantes de asilo, los niños están expuestos a riesgos como la VBG (por ejemplo, embarazo adolescente, violación, explotación sexual), los riesgos asociados con los menores que viajan solos, la falta de documentación, la discriminación, el trabajo infantil, el reclutamiento de grupos armados y la trata de personas (GIFMM et al. 11/12/2023).

El Niño también podría afectar las condiciones de los migrantes y solicitantes de asilo. OCHA ha declarado que se deben priorizar las zonas limítrofes de Nariño y Putumayo, que son propensas a sequías, deficiente manejo del agua y olas de calor recurrentes durante la estación seca. Estas condiciones pueden causar enfermedades como el dengue y el zika, afectando especialmente a las madres y a los lactantes y agravando las enfermedades crónicas (OCHA 24/10/2023).



ANEXO I. ESTADÍSTICAS COMPARADAS DE LA ZONA FRONTERIZA ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR

Tabla 1. Estadísticas de la frontera sur de Colombia: Departamentos de Nariño y Putumayo

INDICADOR	NARIÑO	PUTUMAYO	COLOMBIA (TOTAL)
Población (proyección 2023)	1699570	383042	52215503
% de la población que vive en zonas rurales (proyección 2023)	56,00%	48,20%	23,80%
Cobertura eléctrica rural (2018)	83,39%	51,89%	81,39%
% de hogares rurales con acceso a fuentes de agua mejoradas (2022)	59,90%	36,00%	62,70%
% de hogares rurales con acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas (2022)	82,10%	86,70%	79,80%
Autorreconocimiento étnico (2018)	Indígena = 16,34% Afrocolombiano = 14,13%	Indígena = 23,95% Afrocolombiano = 3,22%	Indígena = 4,28% Afrocolombiano = 6,77%
% de la población en pobreza según el Índice de Pobreza Multidimensional (2022)	17,60%	20,80%	12,90%
% de la población en situación de pobreza según la Línea de Pobreza Monetaria (2022)	40,80%	Sin datos	36,60%
Proporción de la población que sufre inseguridad alimentaria (2022)	37,10%	24,40%	28,10%
Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes (2023)	20,35	44,11	26,85
Tasa de desempleo en la ciudad capital	10,00% (promedio julio-septiembre de 2023)	Sin datos	9,30% (promedio julio-septiembre de 2023)

Fuentes: DANE (consultado el 22/11/2023 a); DANE (consultado el 22/11/2023 b); DANE (consultado el 22/11/2023 c); DANE (22/11/2023, 04/07/2023, 23/05/2023, 05/04/2023, 22/03/2023,); MinJusticia (consultado el 22/11/2023); ART et al. (12/2021)



Tabla 2. Estadísticas de la frontera norte de Ecuador: Provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos

INDICADOR	CARCHI	ESMERALDAS	SUCUMBÍOS	ECUADOR (TOTAL)
Población (2022)	172828	553900	199014	16938986
% de la población que vive en zonas rurales (2022)	49,1%	55,1%	59,3%	36,9%
Cobertura eléctrica rural (2022)	96,5%	91%	89,4%	94,9%
Cobertura de agua potable rural (2022)	87,8%	40%	42,2%	66,9%
Cobertura de alcantarillado rural (2023)	60,1%	10,8%	20,1%	35,8%
Autorreconocimiento étnico (2022)	Indígena = 4,2% Afroecuatoriano = 5,2%	Indígena = 3,4% Afroecuatoriano = 53,8%	Indígena = 16,3% Afroecuatoriano = 4,6%	Indígena = 7,7% Afroecuatoriano = 4,8%
Población en pobreza según el Índice de Pobreza Multidimensional (2022)	32,8%	57,1%	51,5%	38,1%
Población en pobreza según la Línea de Pobreza Monetaria (2022)	38,1%	48%	45,7%	25,2%
Proporción de la población que sufre inseguridad alimentaria (2022)	Sin datos	Sin datos	Sin datos	15,4%
Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes (2023)	2,14	37,60	17,35	35 (proyección 2023)
Tasa de desempleo (2022)	5,9%	9,1%	4,5%	4,4%

Fuentes: INEC (consultado el 22/11/2023 a); INEC (consultado el 22/11/2023 b); INEC (12/2022; 28/02/2023); InfoMIES (consultado el 22/11/2023); Primicias (06/10/2022); OECO (09/2023)